

Manoza
Regina Barrios

PROPOSICIÓN

Manoza
Sept. 15/
2021
FABRIL

Ref: Proyecto de ley "Por el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiación, para la vigencia fiscal del primero de enero, al 31 de diciembre del año 2022" 096-2021 SENADO - 158 - 2021 CÁMARA.

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Artículo ____: Adicionar el Presupuesto de Inversión de la Defensoría del Pueblo en \$ 74.577 millones de pesos, con el fin garantizar el desarrollo de la misionalidad constitucional y legal asignada a la Defensoría del Pueblo, y la atención a población vulnerable, y de especial protección.

JUSTIFICACIÓN

Se propone una modificación al presupuesto asignado a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO para apalancar el Rubro de Inversión teniendo en cuenta que:

Nombre	Solicitado Nación MG	Aprobado POAI	Déficit
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL. NACIONAL	1.200.000.000	500.000.000	- 700.000.000
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS A LA POBLACIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS EN EL TERRITORIO NACIONAL	49.000.000.000	15.000.000.000	- 34.000.000.000
ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS APROPIADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO A NIVEL REGIONAL NACIONAL	18.025.000.000	10.000.000.000	- 8.025.000.000
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - DPC NACIONAL	35.058.924.485	14.000.000.000	- 21.058.924.485
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS A LA POBLACIÓN GENERAL, LÍDERES Y LÍDERESAS SOCIALES Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. NACIONAL	100.000.000	-	-
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - NACIONAL	10.273.440.402	1.716.498.462	- 8.556.941.940
CONTRIBUCION EN LA CONSTRUCCION DE CIUDADANIA DE LA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	22.755.657.817	20.519.181.301	- 2.236.476.516
	107.413.022.704	61.735.679.763	- 74.577.342.941

Yenica Acosta Infante

[Signature]

Históricamente la Defensoría del Pueblo, ha recibido recursos de inversión básicamente para la atención de víctimas del conflicto armado en un promedio de 18 mil millones anuales, restringiendo la capacidad operativa de la Defensoría a una población específica; mientras el resto de derechos y de población se cubren con gastos de funcionamiento. En un momento donde es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica, los sistemas de información, y la logística operativa que permita ampliar el alcance preventivo y la visibilización de comunidades y sus derechos en el territorio nacional.

De otro lado aumentar la cobertura para la atención, promoción, divulgación y prevención en materia de derechos humanos, adicional a lo que ya adelanta la Defensoría en materia de víctimas del conflicto armado. Como se destaca entre otros en el trabajo Defensorial que resaltamos a continuación. Ahora bien, en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Defensoría ha realizado análisis e investigación buscan verificar que las condiciones fácticas, las normas y las políticas o programas en cuestión garanticen las 4 dimensiones principales de estos derechos, siguiendo los estándares internacionales en la materia, así como el Enfoque Basado en Derechos Humanos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el derecho a la alimentación, se participó en el marco del Pacto por Colombia, sobre la política alimentaria en el objeto del plan. Se hace necesario que se prosiga con el seguimiento al cumplimiento de los Derechos y el cierre de brechas para su goce efectivo. Con relación con las peticiones tramitadas por la Entidad, durante el periodo 2020 -2021 recibió 120.000 peticiones, atendidas por la diferentes Dependencias de la Entidad a nivel central y Regional en las 42 sedes con las que cuenta la Defensoría.

La Entidad estima que durante el año anterior y lo corrido de este año en Colombia se adelantaron en promedio 450 manifestaciones o protestas sociales mensuales, siendo el mes de noviembre en el que se presentó el mayor número de hechos conocidos por la Entidad. Cabe señalar que esta tendencia se relaciona con importantes escenarios de protesta como el llamado «Paro Nacional», en el cual diferentes sectores y actores sociales convocaron —a partir del 21 de noviembre de 2019— diversas manifestaciones en rechazo a las políticas gubernamentales. La Defensoría del Pueblo ha previsto el surgimiento de nuevos conflictos sociales, como consecuencia de la demanda de nuevos escenarios de diálogo social y concertación de políticas públicas que garanticen la paz, el restablecimiento de la seguridad ciudadana, el goce pleno del derecho a la vida de líderes y comunidades amenazadas, y posibilite una nueva gobernabilidad e institucionalidad en los territorios.

En los tema ambientales, la Entidad como parte de su labor de entidad nacional de derechos humanos ha realizado diferentes informes defensoriales como el relacionado sobre las fallas en el componente de disposición final del servicio de aseo, especialmente en Bucaramanga y San Andrés Islas; el elaborado con relación al Derecho Humano al Agua, en donde se evidenció que en 99 municipios presentaban riesgos para la salud de los habitantes, en igual línea la Corte Constitucional ha protegido mediante sentencias el derecho humano al agua, entre las que se destacan Sentencia T-302 de 2017 (los niños y niñas del Pueblo Wayú), Sentencia T-129 de 2017 (Zona Rural del municipio de Yarumal), Sentencia T-012 de 2019 (Zona Rural del municipio de Hatillo de Loba y corregimiento de Tierra Bomba en Cartagena), Sentencia 476 de 2019 (Zona Urbana del municipio de Ibagué atendida por un acueducto comunitario), Sentencia T-622 (río Atrato), y a las que la Entidad hace especial seguimiento.

De otro lado, la Defensoría ha realizado estudios sobre el impacto de la infraestructura en los ecosistemas, la contaminación de fuentes hídricas por hidrocarburos ocasionados en su gran mayoría por acciones delictivas, la problemática socio ambiental de la deforestación y la expansión de la frontera agrícola, en lo relacionado con la tala ilegal y los cultivos de uso ilícito, que afecta la capacidad de los ecosistemas para beneficio de la población.

De igual manera, se analizó la problemática de la contaminación atmosférica y su incidencia en los derechos a la salud, informe en el que se analizaron las cuatro principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Sobre el derecho a la salud, y en la temática de la seguridad social, un estudio de tutelas efectuado por la Entidad, para el año 2019, los pacientes con cáncer hicieron 68.429 solicitudes en 26.939 tutelas (13 % de las tutelas en salud), lo que significó un aumento del 9 % frente al año 2018. Según lo evidenciado por la Defensoría del Pueblo, la falta de autorizaciones, la falta de oportunidad para los servicios de oncología y la demora o negación de servicios (procedimientos, tratamientos, cirugías, etc.) por parte de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios fueron los factores preponderantes para estas demandas.

Así mismo, con relación protección y defensa de los DDHH de la población privada de la libertad, con una población de 184.376 personas privadas de la libertad (informe estadístico INPEC enero 2019), tasas de hacinamiento superan el 365 por ciento en algunos centros de detención, la calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente, falta espacio de esparcimiento y resocialización e infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento; hace necesario ampliar y fortalecer la capacidad y la calidad del seguimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la declaratoria de ECI y otras providencias en el tema, e impulsar el ejercicio de la magistratura moral ante las autoridades nacionales y regionales encargadas del sistema, como el Ministerio de Justicia, el INPEC, la USPEC y los entes territoriales, en pro de prevenir casos de maltrato, uso excesivo de la fuerza y actos de tortura en centros de reclusión.

En relación con los derechos de las mujeres y de la población con orientación sexual e identidades de género diversas (OSIGD), en el País se han presentado, según cifras del observatorio de feminicidios en Colombia, 291 hechos a julio de 2020 y con relación a los casos de violencia basada en género VBG, a 2019 se presentaron 123.714 registrados en el sistema SIVIGILA y hasta agosto de 2020, han ocurrido un total de 62.940 casos, por lo que se requiere la promoción y el seguimiento al cumplimiento de los marcos normativos ya existentes, incluyendo aquellos específicos para las víctimas del conflicto, junto con una respuesta clara y oportuna desde la institución en todas las regiones donde hace presencia.

Por último, para fortalecer la presencia territorial del Sistema de Alertas Tempranas y con ello el monitoreo y la advertencia sobre los escenarios de riesgos en el país, así como el seguimiento a las recomendaciones emitidas en cada informe de advertencia, se plantea fortalecer con 400 contratistas a la Defensoría del Pueblo, con un grupo de analistas en territorio en virtud a los recursos del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS A LA POBLACIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS EN EL TERRITORIO NACIONAL", por valor de 29.000 millones de pesos.

Juan Jairo Berrio

ay. an. 2

Jose C. Pinedo

Alfonso Jarama

CIRO RAMIREZ
JOSE ELON HERNANDEZ
Nidia Marcela Osorio

Wilmar Curiño

